



Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



Sin Obras Derivadas — No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

Activar Windows

DESARROLLO, SOSTENIBILIDAD Y RETOS DE LA RURALIDAD EN COLOMBIA

CARLOS ALBERTO CARO LEURO

JONATHAN ALONSO MORENO MURILLO

Palabras Clave: Desarrollo rural, sostenibilidad financiera, ruralidad, inclusión social.

Resumen:

En este ensayo se realiza un análisis de los grandes retos que se tiene con la ruralidad en Colombia para lograr un desarrollo económico y social sostenible, que les permita a estas zonas del país reducir las brechas existentes en aspectos como ingresos económicos, empleo, acceso a la educación, tecnología e infraestructura.

La corresponsabilidad de los gobiernos y las empresas debe estar centrada en fomentar y generar programas y políticas públicas que permitan promover el desarrollo territorial permitiendo así nivelar las oportunidades, capacidades y calidad de vida de los campesinos en Colombia.

Introducción:

Colombia actualmente es un país en desarrollo, presenta falencias en la destinación y uso de los recursos económicos. La salud, educación y el empleo son los temas más debilitados en el país, agudizándose de forma importante en las zonas rurales, por ende, se hace necesario centrar los esfuerzos del Gobierno, sectores productivos, empresas y la sociedad civil para la atención prioritaria de todas estas problemáticas.

El fomento y facilitación de incentivos se deben fortalecer para generar la producción de bienes y servicios que faciliten el desarrollo económico del sector rural y permitan generar productos de consumo para el mercado interno y de exportación. El producto interno bruto (PIB), es definido como la magnitud macroeconómica fundamental que mide el valor total de la corriente de bienes y servicios finales en una economía por unidad de tiempo (Bajo y Monés, 2000). Como sucede en los países de la región, la importancia del sector agropecuario y su impacto directo en la economía de Colombia presenta un alto grado de relevancia siendo la base y principal generador del desarrollo económico al facilitar la mano de obra para los demás sectores, los alimentos para el sostenimiento de la fuerza de trabajo en toda la economía y parte de las materias primas utilizadas en la transformación, generando así el ingreso de divisas necesarias para importación de materias primas y bienes de capital (Arango Londoño, 1985).

El concepto de ruralidad no se limita exclusivamente a lo agrícola, ni a la producción primaria como se conoce en términos de industrialización, el medio rural abarca el conjunto de regiones o zonas en las que se asientan pueblos, aldeas, pequeñas ciudades y centros regionales, espacios naturales y cultivados y en donde se desarrolla una gran diversidad de actividades como la agricultura, industria pequeña y mediana, comercio, servicios, ganadería, pesca, minería, turismo y extracción de recursos naturales (CEÑA, 1993).

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento tiene como objetivo visibilizar la importancia de la ruralidad en Colombia y el mundo, e identificar y dilucidar los principales retos que tenemos como comunidad para contribuir al desarrollo sostenible de este sector, además de fomentar la igualdad en términos de oportunidades, inclusión y formación de la población que habita en las zonas rurales de Colombia

Desarrollo

Las principales fuentes de ingresos para la población de las zonas rurales de Colombia son obtenidas principalmente por actividades agropecuarias, extracción de materiales, minería y la fabricación de artesanías y artículos elaborados a base de fibras de plantas y pieles de animales. La agricultura representa el 6,2% del Producto Interno Bruto – PIB (DANE, 2019) y se estima como una de las principales fuentes de ingreso en las zonas rurales.

Desde los años 70 en Latinoamérica se establecen procesos de búsqueda de desarrollo, durante los siguientes años se han realizado programas y estrategias de desarrollo al sector rural que han permitido la inversión en producciones agropecuarias permitiendo así la competitividad en los mercados.

Para el análisis del desarrollo y la sostenibilidad de las zonas rurales en Colombia, es importante integrar el concepto de economía verde, el cual contempla el desarrollo social y ambiental, además, de la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los cuales se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y social. La sostenibilidad consiste en la adopción de objetivos de desarrollo sostenible, especialmente equidad social, eficiencia económica y rendimiento ambiental; para lograr estas metas es necesario hacer cambios fundamentales, y estos cambios son denominados innovación (Elzen et al., 2004).

De acuerdo con lo anterior, consideramos de suma importancia fortalecer mecanismos de producción en los cuales los involucrados, en este caso los productores, manufactureros y empresas que se encuentran en áreas rurales, puedan establecer procesos productivos sostenibles y

competitivos, que, además, contribuyan con la generación de empleo formal y generen el desarrollo de capacidades, reduciendo las brechas de desigualdad de género y edad.

Para el fortalecimiento del sector, consideramos importante la creación de gremios o asociaciones que faciliten realizar actividades colectivas de forma estable y organizada, que permita vincular los grupos productores para buscar articulaciones con aliados estratégicos y fortalezca su capacidad competitiva en los diferentes mercados, incluyendo el interno y el internacional.

Otros aspectos priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas zonas rurales deben ser la seguridad alimentaria, agua potable y adquisición de materias primas a precios accesibles, recursos y el fomento y desarrollo de capacidades en temas de proyectos de producción. El conflicto armado, el narcotráfico, la minería ilegal y la tala indiscriminada de árboles son algunos de los obstáculos que no ha permitido que el estado genere una total intervención a las áreas rurales más dispersas del país. Es claro que una intervención de las instituciones vinculadas a los procesos de paz y al desarrollo rural deben generar un gran aporte a la estructuración de economías solidarias y cooperativas en el sector rural.

Es justamente el conflicto armado la razón del incremento de los niveles de pobreza a nivel rural, ampliando las brechas entre la ciudad y el campo. Según Palmett Bechara, (2014), el impacto que ha tenido la prolongada presencia de conflicto armado en Colombia es la causante del atraso en materia de agricultura en el país, debido a que las actividades que se ejecutan en muchas tierras con presencia de guerrillas o con historial de desplazamiento son en baja proporción dirigidas a la producción de bienes agrícolas y en mayor medida al control territorial y la producción de drogas ilícitas. Colombia utiliza apenas el 24,1% de sus tierras para la producción agrícola, a su vez que posee más de 145 mil hectáreas con siembra de coca, amapola y marihuana. De igual forma, el conflicto armado deja como resultado más de 3 millones de desplazados en los últimos años,

equivalente al 6% de la población colombiana total, que se trasladan a los principales centros urbanos aumentando los niveles de desempleo. Para Álvarez y Rettberg (2008), el conflicto armado colombiano presenta costos económicos y sociales que permitirían comprender el bajo desarrollo en sectores productivos claves y la distribución de la riqueza en el país. Para el caso rural se hace especial énfasis en la improductividad que enfrenta el agro colombiano por causa del conflicto, donde las familias rurales abandonan sus tierras productivas a causa del desplazamiento forzado. De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que el conflicto armado solo genera pobreza y subdesarrollo, de ahí la necesidad de generar oportunidades educativas y laborales para buscar que los jóvenes se puedan capacitar, formar y emprender en proyectos productivos que generen ingresos, empleo y desarrollo y se reduzca la tasa de vinculación de menores a grupos armados y actividades ilícitas.

Las diversas estrategias encaminadas a fomentar el desarrollo y la sostenibilidad han contribuido con avances importantes, las reformas agrarias han incidido favorablemente en el desarrollo rural, sin embargo, no han alcanzado la efectividad necesaria para suplir algunas necesidades, ya que carecen de información muy importante como la falta de identificación e inclusión del 100% de los habitantes de las zonas rurales colombianas, generando más inequidad, especialmente por el estado de abandono y olvido de las más alejadas de nuestro país.

La destinación de recursos para el desarrollo del agro en Colombia ha sido mínimos, comparados por ejemplo con los destinados para combatir al conflicto armado, esto sumado a los temas de corrupción que tanto han afectado a nuestro país como el tan sonado proyecto de Agro Ingreso Seguro. A pesar de esto, las inversiones que se han realizado para este sector han permitido la consolidación y crecimiento de pequeños productores y de algunas asociaciones.

Se conoce que adicional a las dificultades socioeconómicas que presentan muchos núcleos familiares de las zonas rurales, el analfabetismo genera un impacto más fuerte al momento de generar un desarrollo en estos lugares, impidiendo el crecimiento a nivel profesional o técnico de muchos de los habitantes del sector rural.

El fomento productivo y asociativo dirigido a las zonas rurales en donde no se realiza ninguna actividad productiva es una necesidad que se debe solucionar con la estimulación al uso de tierras, no para fines agropecuarios o ganadería extensiva, sino para proyectos autosostenibles y amigables con el planeta. Estas iniciativas pueden ser impulsadas por la sociedad civil, la empresa privada y el sector gubernamental, permitiendo la implementación de conocimientos a nivel productivo y financiero, que permita la diversificación de ingresos, generación de empleo, productividad y competitividad.

Al existir un alto grado de analfabetismo y falta de inversión en el sector rural, la implementación de tecnologías de la información se complejiza, creando una brecha mucho más grande con relación a los habitantes de las zonas urbanas, el desconocimiento de las TICS y del internet impide que las áreas rurales conozcan los beneficios a los que pueden aplicar, limita el acceso a la educación y no permite conocer y enterarse de proyectos liderados por entidades públicas y privadas que les permita incluso acceder a recursos financieros apalancados por estas entidades.

El entorno y las circunstancias propias de cada zona influyen en cómo se proyectan y desarrollan educativa y profesionalmente las personas, por ende, se deben desarrollar políticas públicas que incorporen una variable territorial donde se evidencien claramente las oportunidades y restricciones que los distintos territorios rurales generan. En Colombia las brechas son muy marcadas lo que conduce a impedir que las mujeres y los jóvenes rurales desarrollen y aporten su potencial y participen en la transformación rural.

Los jóvenes rurales tienen un gran potencial para enfrentar los desafíos de la transformación rural inclusiva y sostenible, comparados con los adultos rurales tienen mayor escolaridad, mayor proximidad a la información y el uso de nuevas tecnologías, mayor capacidad de innovación, mayor conciencia ambiental y se mueven más fácilmente entre lo urbano y lo rural. Por eso, son un actor clave para un desarrollo justo, sostenible e inclusivo en los territorios rurales de América Latina. Sin embargo, respecto de sus pares urbanos, los jóvenes rurales enfrentan brechas y restricciones para su desarrollo: experimentan mayor abandono escolar, menor acceso a educación superior, más embarazo adolescente, menor acceso a empleos en general y en particular a empleos de calidad. También enfrentan brechas respecto de los adultos rurales: tienen menor participación laboral, menos acceso a la tierra, a la oferta de extensión y al crédito para emprender actividades económicas. (RIMISP Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural)

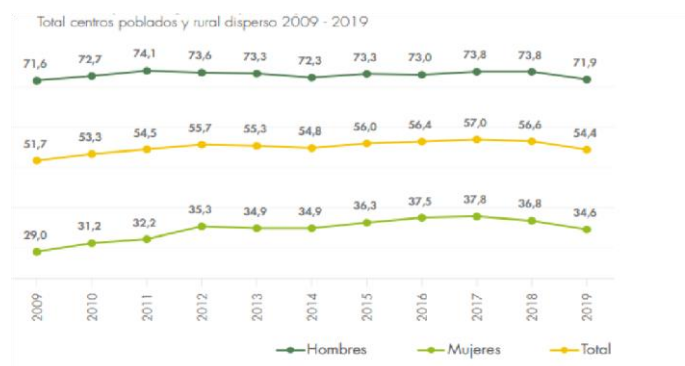
La inclusión de la mujer en los programas de desarrollo y en programas sociales debe ser una de las responsabilidades gubernamentales, teniendo en cuenta que muchas de las actividades productivas rurales las ejercen las mujeres, eso a su vez, funcionará como herramienta para fomentar la igualdad de género y disminuir la discriminación que se presenta en Colombia. Actualmente los grupos de mujeres más afectados por la discriminación de género son las pertenecientes a grupos poblacionales como los indígenas y grupos afros, especialmente aquellas que han sido víctimas de desplazamiento, dificultando el acceso a trabajo y obtención de ingresos. Las mujeres aún son víctimas de la desigualdad de género, de exclusión social, donde la intersección del género, la etnicidad, la edad y el territorio, pronuncian la marginación de algunas de ellas en la sociedad.

El Conpes 161 sobre Equidad de género para las mujeres, aprobado en el 2013, trata de desarrollar una verdadera directriz para que las mujeres en Colombia tengan acceso al proceso de integración social y laboral. (Gobierno de Colombia, 2013)

En 2019, en las zonas rurales la tasa de ocupación de las mujeres fue más baja que en las zonas urbanas. Por un lado, en la zona rural la tasa de ocupación de mujeres y hombres fue de 34,6% y 71,9% respectivamente; por el otro, en la zona urbana fue 48,7% para las mujeres y 66,6% para hombres. Esto significa que las zonas rurales registran una brecha de la tasa de ocupación entre mujeres y hombres aún mayor que en las zonas urbanas. En este sentido, la brecha de la tasa de ocupación en las zonas rurales ha sido en promedio de 38,4 puntos porcentuales durante la última década, mientras que en las zonas urbanas ha sido de 18,1 puntos porcentuales en el mismo periodo.

(DANE, informe Mujeres rurales en Colombia).

Tabla 01: Tasa de ocupación según sexo (porcentaje).



Fuente: DANE-GEIH, 2009-2019

Tabla 02: Brecha tasa de ocupación entre hombres y mujeres (puntos porcentuales).



Fuente: DANE-GEIH, 2009-2019

En la contribución y fomento de proyectos productivos sostenibles e inclusivos, la banca financiera juega un papel muy importante, desde sus políticas empresariales y de responsabilidad social deben generar programas que destinen recursos importantes, a tasas bajas y competitivas para que dichos proyectos se puedan apalancar y de esta forma pasar de ser proyectos a ser empresas sostenibles, con un bagaje importante en los mercados en los que compiten, es importante que estos programas logren llegar hasta las zonas más apartadas para que todos tengan las mismas oportunidades, permitiendo así un crecimiento económico y sostenible.

Actualmente las tasas de intereses para créditos de libre inversión son muy altas y poco viables para la financiación de este proyectos, por ende, una buena opción es el Banco Agrario de Colombia el cual ofrece múltiples soluciones financieras para impulsar las diferentes fases de producción, transformación y/o comercialización de bienes y servicios agropecuarios, forestales, acuícolas, pesqueros y mineros, así como las actividades de mejoramiento y procesos de la cadena agropecuaria y agroindustrial, actualmente cuentan con tasas de interés viable y competitivas, además de periodos de gracia para comenzar a pagar dichos créditos, cuentan con cobertura en el 94% del territorio nacional llegando incluso a municipios donde otras entidades bancarias no hacen presencia. De acuerdo con lo anterior, el Banco Agrario es una buena opción de financiación pues comparado con las demás entidades financieras, priorizan créditos de agro, aun cuando este sector es catalogado como de riesgo alto por las exposición que tiene a factores externos como lo son el

clima, la regulación de precios, distribución y plagas, Por ejemplo cuando se explora con los campesinos que han labrado la tierra desde hace más de tres décadas, se encuentra que un cultivo el cual ha requerido una inversión financiera importante, se puede perder en una sola noche a causa de heladas, inviernos o desastres ambientales, además que en los precios de sus productos son los mismos comparado con el valor a los que eran comercializados las mismas cantidades veinte o treinta años atrás, es decir, cada vez más pobreza y deterioro de este sector porque no se ha logrado ni siquiera ajustar la inflación y se ha perdido el valor adquisitivo del dinero en el tiempo. La emergencia sanitaria, económica y social ocasionada por el COVID-19 también ha impactado de forma directa en las zonas rurales del país, además de los temas relacionados con la salud, ha traído consigo la dificultad para la comercialización de productos y abastecimientos de las centrales de alimentos, impactando de forma directa los bajos precios y ocasionando que se pierdan grandes cantidades de cosechas y por ende sus inversiones. Lamentablemente esto es un retroceso hacia los avances que se venían dando en Seguridad alimentaria, nutrición, medios de vida, desarrollo y educación. Según investigaciones que realizamos, el gobierno como medida de apoyo al sector rural para mitigar los efectos económicos del COVID-19 a través del Ministerio de Agricultura anunció que todos los productores agropecuarios del país, a partir del primero de abril, podrían acercarse a las entidades bancarias para solicitar el crédito “Colombia Agro Produce”, con bajas tasas de interés para el pequeño y mediano productor.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, entidades públicas como el ministerio de agricultura o la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible -DDRS- debe liderar, promover y evaluar políticas encaminadas a impulsar el desarrollo rural y agropecuario del país, a través del diseño e implementación de herramientas de planeación estratégica, la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, la elaboración de documentos CONPES en temas relacionados con desarrollo rural, agropecuario, forestal y pesquero, la provisión de insumos técnicos para el diseño de modelos de

intervención y el diseño de estrategias para aplicar en la política sectorial. (DNP, 18 de agosto de 2020)

Conclusiones

1. Es necesario desde la sociedad civil, el gobierno y los distintos sectores de la economía promover políticas de desarrollo rural, que permitan contribuir con la reducción de desigualdades y permita acceder a las mismas oportunidades a todas las personas.
2. Se deben adoptar estrategias y políticas públicas que contribuyan a la reducción de las brechas, barreras e inequidades, en materia de autonomía económica y desarrollo sostenible.
3. Como sociedad, tenemos la corresponsabilidad de contribuir y fomentar el desarrollo, diversificación de ingresos y la sostenibilidad de los proyectos en nuestras zonas rurales.
4. Se debe desarrollar para las zonas rurales en Colombia, un modelo económico que vaya de la mano con el desarrollo social, que genere beneficios para todos sus grupos relacionados y esté en equilibrio con el medio ambiente.
5. Priorizar el consumo de los productos nacionales.
6. Es necesario la continuidad de los procesos de Paz que garanticen la creación de programas incluyentes y sostenibles, que permita la generación de ingresos y mitigue las brechas de desigualdad y pobreza.

Bibliografía

- Berrío, M., Espitia, J., Ferrari, C., González, J. I., Hernández, I., Tassara, C., Varela, D., Villabona, J., Zafrai, G. (2020). El Plan Nacional De Desarrollo 2018-2022 “Pacto Por Colombia, Pacto Por La Equidad”. Reflexiones Y Propuestas. <https://search-proquestcom.ucatolica.basededatosezproxy.com/docview/2407717102/3CC30BE6B56140F4PQ/71?accountid=45660>
- Casas, L. F., & Lozano, A. (2018). Biocomercio y sostenibilidad: análisis en torno a las materias primas de las artesanías en Colombia. Repositorio Fundación Natura Colombia. <https://search-proquestcom.ucatolica.basededatosezproxy.com/docview/2405611471/3CC30BE6B56140F4PQ/48?accountid=45660>.
- Chará-Ordóñez, W.D., Castillo-Garcés, A. & López-Martínez, J.C. (2018). Entre la pobreza y la producción agropecuaria: población rural dispersa en Colombia, 2016. Revista de Antropología y Sociología: Virajes, 20 (1), 113-127. <http://web.b.ebscohost.com.ucatolica.basededatosezproxy.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=ad4b3362-a515-4ab5-8e87-1faf3e171983%40pdc-vsessmgr01&bdata=Jmxhbm9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl>
- Hoyos, L. M., (2014). El Marco Analítico de Harvard (gender mainstreaming) en los análisis del derecho económico: propuesta para visibilizar a la mujer en los procesos de desarrollo económico en Colombia. Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Revista de Derecho Público N.o 33 Julio - diciembre de 2014. <http://web.b.ebscohost.com.ucatolica.basededatosezproxy.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=59469b86-f5ed-4856-9bce-12ca8522af0d%40sessionmgr103>
- Departamento Nacional de Planeación, (2013, 12 de marzo). Documento Conpes Social. Equidad De Género Para Las Mujeres. <http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/ConpesSocial-161-de-2013-Equidad-de-Genero.pdf>
- Gómez, M., & Montesinos, J., (2014). Gobierno electrónico y transparencia financiera y presupuestal de los departamentos en Colombia. Revista Venezolana de Gerencia. N° 68, 2014, 670 – 698. <http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basededatosezproxy.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=b371aa8d-e922-4ffd-b958-00828e652ac6%40sessionmgr4006>
- Mena, M., Santoyo, V., Muñoz, M., Reyes, J. (2015). Profundidad y sostenibilidad financiera de las bancas de desarrollo rural mexicanas con relación a las de América Latina. <http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basededatosezproxy.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=c2c3d06e-6d45-46f3-88d8-a220d23f4c3c%40sdc-v-sessmgr01>
- Sierra, P., (2020). Sostenibilidad Y Eficacia, El Reto De Las Organizaciones Sociales En Colombia: Colombia Sostenibilidad. EFE News Service. <https://search-proquestcom.ucatolica.basededatosezproxy.com/docview/2422157098/80E67196D8544700PQ/1?accountid=45660>

Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. (2020, 17 noviembre). Jóvenes Rurales y Territorios. <https://webnueva.rimisp.org/nuestro-trabajo/territorios-e-inclusion/jovenesrurales-y-territorios/>

Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. (2020, 17 noviembre). Territorios e inclusión. <https://webnueva.rimisp.org/nuestro-trabajo/territorios-e-inclusion/territorios-einclusion/>

DANE. (2020, 17 noviembre). Mujeres Rurales En Colombia. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/sep-2020-%20mujeresrurales.pdf>

Agencia EFE S.A. (2015). Expertos de seis países debaten en Colombia sobre integración rural y urbana. <https://search-proquestcom.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1727467918/83767F5487104D47PQ/1?accountid=45660>

Contreras, O. E., Pedraza, A. C., Herrera, C. (2015). La inclusión social de la fuerza laboral en Colombia. ¿En contravía de lo sostenible? <https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1715656117/309DF8012EBD4448PQ/1?accountid=45660>